

La integración de los inmigrantes y algunos de los desafíos que nos plantea

Francisco Torres

Existen muy diversas concepciones, situaciones y procesos a los que se denominan integración. Esto ocurre, al menos en parte, por la confusión entre inserción social de los inmigrantes e integración. Inserción social hace referencia al proceso de inclusión de los inmigrantes en nuestra sociedad (como trabajadores, vecinos, usuarios de los espacios públicos). La inserción de los inmigrantes puede, por tanto, adoptar muy diversas fórmulas, de muy distinta calidad democrática y con diferentes consecuencias sociales. Sin salir de la piel de toro: tanto la particular segregación socio-espacial de El Ejido, como la convivencia vecinal en los barrios "multiculturales" de Madrid, Barcelona o Valencia, tampoco exentas de problemas, constituyen dos procesos y formas de inserción muy distintas. Normalmente, cuando se habla de integración se hace referencia a una inserción social que no comporte la marginación y exclusión de los inmigrantes, ni tampoco la asimilación cultural forzada. Integración, por tanto, hace referencia a un "buen" proceso de inserción social de los inmigrantes. Es un término que comporta una valoración normativa positiva. Y ésta es una segunda razón para el uso tan heterogéneo de integración. Dadas sus connotaciones progresistas, políticamente correcto y simpático, se califica como integración el proceso de inserción social de los inmigrantes que se desea legitimar. Y, en nuestro mundo, como en el de Alicia, quien tiene el poder dice lo que son las palabras, les da contenido.

En el Plan de Integración de 1994 se establece una concepción de integración basada en la inserción laboral de las personas inmigrantes, la seguridad jurídico-administrativa respecto a su situación, y un tratamiento no discriminatorio. El Programa Greco, recientemente aprobado, incide en los mismos aspectos sin mejo-

Javier de Lucas y Francisco Torres (2002)
Inmigrantes: ¿cómo los tenemos?
Madrid, Editorial Laclay

rarlos. La incorporación al mercado de trabajo, "en igualdad de condiciones con los españoles", y una muy corta nómina de derechos por garantizar, constituye la integración para la Secretaría de Estado para la Extranjería y la Inmigración, a tenor de las medidas del Plan Greco¹. Por otro lado, cuando se habla de integración, el esfuerzo y la adaptación le corresponden al inmigrante. El debe "integrarse". Nosotros, la sociedad receptora, no parece que debamos modificar nada como consecuencia de una convivencia más compleja.

De acuerdo con esta concepción, la integración no es un derecho del inmigrante, es decir, del extranjero que vive y trabaja entre nosotros. Hay que recordar cómo los inmigrantes indocumentados, por su situación administrativa, quedan fuera del proceso de integración que define la Administración. La integración se modula como contrapartida a la "buena inmigración". ¿Cómo se define la buena inmigración? En primer lugar, la buena inmigración es la que atiende a nuestras necesidades económicas y lo hace de forma legal. Se da aquí una doble exigencia muchas veces contradictoria ya que, como veremos, no siempre la lógica económica fomenta la legalidad. En segundo lugar, la "buena" inmigración está compuesta por inmigrantes culturalmente integrables. Recientemente, la integración aparece como un problema cultural ya que hemos descubierto la existencia de inmigrantes inintegrables, o en versiones menos extremas, la necesidad y conveniencia de fomentar una inmigración más "cercana" culturalmente, a la que se presupone una inserción social más sencilla. En tercer lugar, la inmigración digna de integrarse es aquella que está dentro de los límites de nuestra capacidad de recepción (tanto por su número, que no debe rebasar el "umbral de tolerancia" social, como por la rapidez del proceso y de sus consecuencias). Una parte de los mecanismos de la política de extranjería (cupos, sistema de permisos, conve-

¹El Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (Plan Greco), aprobado en 2001, dedica uno de sus cuatro "pilares" a "la integración de los residentes extranjeros y sus familias". Este gran objetivo se concreta en medidas relacionadas con la inserción laboral (ordenación de migraciones intrastatales y programas de formación) y "alcanzar el ejercicio pleno de los derechos". Un marco de derechos que, según el Plan Greco, es más bien parco ya que su ejercicio pleno parece cubierto con "la prestación de asistencia sanitaria...", la atención educativa específica..., la agilización de la tramitación de la reagrupación familiar... y el ejercicio de la libertad religiosa" (medidas 2.1.a, b, c y d). El resto de acciones para conseguir la integración se refieren a la atención a los extranjeros en situaciones de vulnerabilidad, la mejora de procedimientos administrativos, el apoyo a las ONG y la realización de campañas de sensibilización.

nios con países de emisión) se orienta a la construcción de esa "buena" inmigración que pueda integrarse.

Integración como relación y como proceso

Como contraste crítico con esta concepción y como referencia de mi análisis, propondré, sin ánimo de originalidad, otra idea de integración. Siguiendo a Giménez (1996), De Lucas (1998, 2001) y Delgado (1998), entre otros, entenderé por integración el proceso de incorporación de los inmigrantes a la sociedad española en igualdad de condiciones, derechos y deberes con los nacionales, mediante el cual puedan llegar a ser participantes activos de la sociedad de acogida, conformando también la vida social, económica y cultural, sin que se les imponga el precio de la renuncia a su cultura de origen. De esta definición, resaltaré tres notas que, en mi opinión, deben ser prioritarias a la hora de caracterizar un proceso de inserción social como integración.

La primera nota es la igualdad de derechos y obligaciones, igualdad que no sólo hace referencia al estatus jurídico del extranjero, sino también a que reciba un "igual trato" social. La proclamación genérica de igualdad está presente en todos los discursos sobre integración. Las diferencias empiezan a percibirse cuando se abordan los diversos obstáculos y fronteras que impiden la igualdad proclamada. Por ejemplo, la jerarquía de derechos que diferencia y separa entre ciudadano, inmigrante residente e inmigrante indocumentado. O las prácticas sociolaborales que conforman una inferior y desigual inserción de las personas inmigrantes en el mercado de trabajo.

Segunda nota. El trato igual a los nacionales no debe implicar, obligatoriamente, la asimilación cultural de las personas inmigrantes. La aculturación no puede ser un precio a pagar, o a exigir, por la igualdad de trato. Por tanto, esta idea de integración implica el respeto y cierto derecho a la diferencia, que se considerará legítima. Hablo de cierto derecho a la diferencia para delimitar esta propuesta del relativismo absoluto².

²El relativismo estricto comporta no pocos problemas. Unos de tipo lógico. Si todo es relativo, ¿cómo argumentar la superioridad del relativismo para la gestión de la diversidad? Otros prácticos: ¿cómo establecer normas comunes si no concedemos prioridad a unos valores sobre otros? Otros, en fin, son morales: el relativismo absoluto incapacita para juzgar y reaccionar frente a la injusticia y la violencia amparada por alguna tradición cultural.

Por tanto, tenemos diversos problemas de definición y gestión. ¿Cuáles son los límites de la diferencia legítima? Por otro lado, además de las normas y cultura propias de cada grupo, deben existir una serie de valores y normas comunes, colectivos, que sustentan la vida social. ¿Cuáles son esos valores y normas? Dado que éstos son *contritos* sociales, históricos... ¿Cómo y quiénes los determinan? ¿Cómo se modifican, adecuándose a una realidad cambiante?

En tercer lugar, esta concepción de integración pone el acento en la interacción. No apunta a conseguir una mera coexistencia entre colectivos de inmigrantes y sociedad receptora. No aspira a una sociedad de grupos étnicos, más o menos cerrados, cada uno en su nicho sociocultural, y cuyos miembros interaccionan básicamente en el mercado. Se defiende la continuidad recreada de cada cultura y amplios espacios de cultura común, nacida de la interrelación y del mestizaje, base para la negociación y ajuste de los valores y normas básicos de la convivencia de todos. En este sentido, este concepto de integración es interculturalista. Se alude a una interrelación en los distintos ámbitos de la vida social, a un proceso de interacción que no se limita a intercambios culturales sino que éstos se basan en espacios, redes y relaciones sociales comunes.

La interacción nos remite a otro aspecto de un proceso de integración. Que se trata de una relación entre dos partes: la sociedad receptora y los colectivos de inmigrantes. Si no concebimos la integración como simple asimilación, hemos de concluir que es una relación que requiere un esfuerzo por las dos partes y, como consecuencia, las dos partes cambian. La cultura musulmana propia de una parte de los inmigrantes se rehace en los países europeos, adaptándose. También deberíamos hacerlo nosotros, por ejemplo, considerando plenamente legítimo que los minaretes de las mezquitas sean un elemento del paisaje urbano como las torres de las iglesias. El resultado es una sociedad más compleja que, en parte, mantienen sus características anteriores más o menos adaptadas y, en parte, incorpora elementos nuevos y diferentes como consecuencia de contar con unos nuevos miembros: los inmigrantes.

Obviamente, ni la sociedad de recepción ni los colectivos de inmigrantes constituyen dos bloques homogéneos. La sociedad receptora está cruzada por diferencias de posición socioeconómica, diversidad de recursos y poder y una coexistencia heterogénea de

identidades complejas. Los diversos grupos de la sociedad receptora no tienen por qué coincidir en la visión de la inmigración, en su relación real o imaginaria con ella, y en lo que consideren una adecuada gestión del fenómeno. Por su parte, la inmigración además de su diversidad de género, país y cultura de procedencia, es también heterogénea por su diversa inserción, las diferentes estrategias que adopta y las dinámicas que se generan. Unos y otros, desde su heterogeneidad, no son objetos pasivos de una relación de integración. También la modulan. Un proceso de inserción social adoptará unas características u otras, en función de las estrategias, líneas de acción y prácticas sociales que adopten los poderes públicos, los agentes sociales y la gente común de la sociedad de recepción. Los colectivos de inmigrantes, con muy desigual incidencia, también desarrollan las dinámicas y estrategias que consideran más acorde con sus intereses.

Hay que destacar, también, que el proceso de integración supone una relación desigual, pues se da una desigualdad básica, radical, entre los dos polos de esta relación. Uno de ellos, la sociedad receptora, tiene la posición dominante por su peso numérico, el funcionamiento socioeconómico y la normativa legal que la regula, así como por su imaginario identitario que le da cohesión y legitimidad. Los inmigrantes tienen una posición "inferior" dado que constituyen una minoría, extraña y extranjera, que intenta hacerse un espacio social que le permita iniciar una nueva vida. Esto, que es una obviedad, interesa resaltarlo. En buena lógica, también la responsabilidad de las dos partes es desigual. Que el proceso de integración tenga éxito, no genere sufrimiento y tensiones innecesarias y se desarrolle con unos mínimos de calidad democrática es responsabilidad —sobre todo— de la sociedad receptora, ya que ésta ostenta la posición dominante y dispone de mayor poder. Obviamente, todo proceso de integración requiere del esfuerzo de los inmigrantes. Pero es la sociedad receptora o, al menos, una mayoría de ésta, la que puede y debe aceptar e incorporar los cambios estructurales, normativos y culturales para que la integración así definida sea una realidad.

La integración es un proceso multidimensional, pues la vida en común, en sociedad, lo es. Apuntaré aquí, de forma sucinta, algunas de estas dimensiones. En primer lugar, la dimensión normativa, es decir, el estatus legal y la relación con la ciudadanía de los inmigrantes. Otra dimensión básica es la socioeconómica, la con-

secución de un trabajo que permita la autosuficiencia económica y unas condiciones de vida "dignas", de acuerdo con los estándares de la sociedad de recepción. La integración dependerá, también, de los contextos sociales generados por el tipo de inserción socioespacial, la vivienda y ubicación de ésta, las relaciones vecinales que se establecen, la presencia de los inmigrantes en los servicios públicos (sanidad, enseñanza y servicios sociales) y la interacción en los espacios públicos³. Podemos apuntar otra dimensión, constituida por los recursos de sociabilidad, particularmente las redes. Destacaré, por último, la importancia de la dimensión sociocultural e identitaria, es decir, el conjunto de representaciones sociales, valores y símbolos, con las que nos reconocemos nosotros y "ve-mos" a los inmigrantes y que orienta nuestra acción.

Entre estas diferentes dimensiones se da una interrelación profunda. La inserción laboral depende, entre otros factores, de la situación documental, pero también de la información y oportunidades que ofrecen las redes a las que se pertenece. A su vez, el trabajo no sólo supone una fuente de ingresos, sino la inserción en unas relaciones y prácticas sociolaborales concretas que tienen implicaciones para otras facetas del proceso de integración. Disponer de contrato de trabajo es requisito imprescindible, junto con un aval, para conseguir el alquiler de una vivienda. Esta interrelación profunda entre dimensiones no supone un determinismo por parte de alguna de ellas, ni una prelación en el tiempo o en su importancia. Más bien, un proceso de integración es el resultado de la conjunción de tendencias favorables en una mayoría, al menos, de las dimensiones señaladas. Así, por ejemplo, se puede dar una aceptable inserción laboral por sus condiciones de trabajo, y ser compatible con una situación de *guetización* cultural. Por otro lado, el reconocimiento de un amplio marco de derechos es condición necesaria, pero no suficiente, para un proceso de integración, como nos muestra la marginación y exclusión secular que padece el pueblo gitano, aun a pesar de estar compuesto por ciudadanos y ciudadanas españoles con plenitud de derechos sobre el papel.

³ Me refiero a las plazas, parques y jardines, servicios públicos, instalaciones deportivas, la puerta de los colegios o la sala de espera del centro de salud. Espacios comunes que generen una interacción social cotidiana entre unos y otros; que genere reconocimiento, visualización del otro y su incorporación a las rutinas cotidianas.

Sirva lo dicho para destacar que la diferenciación del proceso de integración en dimensiones constituye una licencia metodológica, útil analíticamente. En la realidad, en los procesos de inserción concretos que viven y protagonizan los hombres y mujeres inmigrantes, el conjunto de estas dimensiones conforma un único contexto social, una situación concreta de inmigración, cambiante en cuanto a sus límites y oportunidades.

Entender la integración como proceso, como enfatiza Dassetto, destaca su carácter temporal, histórico, cambiante y dinámico. La integración no es algo que se da de forma más o menos inmediata, ni de una vez por siempre. La integración se hace en un periodo de tiempo, se suele señalar dos generaciones, y se modifica de acuerdo con el cambio de las condiciones socioeconómicas, las leyes, las realidades identitarias y las fuerzas sociales operantes. En el desarrollo del proceso de integración operan factores estructurales, como el mercado de trabajo; institucionales, como la normativa de extranjería y la acción de las Administraciones, y también socioculturales (el "sentido común" hegemónico respecto a la visión de la inmigración y cómo tratarla). Estos factores "macro" son modulados, filtrados y concretados por los contextos locales y las redes como enfatizan Izquierdo y Noya (1999). Unos contextos locales favorecen más un proceso de integración que otros, aun dentro del mismo marco general o estatal.

En cada una de las dimensiones que hemos señalado existen diferentes límites o fronteras que dificultan o hacen imposible un proceso de integración como el definido al inicio. Como las divisiones territoriales entre Estados, las fronteras a las que aludo son históricas, cambiantes, construidas socialmente mediante el diálogo y, más a menudo, la fuerza. Responden a poderosas dinámicas sociales, aunque son modificables y se han modificado a lo largo de la Historia. Son fronteras que generan obstáculos y acumulan riesgos para un proceso de integración. En este texto me centraré en tres ámbitos del proceso de integración y comentaré cuatro obstáculos de particular relevancia: la segmentación étnica sociolaboral, la frontera de la ciudadanía, la identificación entre trabajo formal y residencia legal y la frontera de la diferencia cultural. No pretendo plantear soluciones; mi pretensión es más modesta: delimitar problemas y ayudar al debate.

Insertión laboral e integración. La frontera de la segmentación étnica sociolaboral

La inserción laboral es un aspecto básico de todo proceso de integración, tanto por razones de legitimidad como por las condiciones sociales que, en principio, genera.

El discurso dominante podría expresarse así: la inmigración es legítima en cuanto responde a las necesidades de mano de obra y constituye una aportación a la actividad económica y al sistema financiero de la Seguridad Social mediante el trabajo formal, que proporciona al inmigrante autosuficiencia económica. Lo integra como miembro activo y reconocido de la sociedad. El trabajo formal constituye además, mediante la cotización derivada, la puerta de acceso a las redes de seguridad y servicios que configuran una parte importante de la ciudadanía (tal y como se ha entendido en Europa Occidental en las últimas décadas).

Las personas inmigrantes se insertan laboralmente en los puestos y sectores de menor cualificación, salarios más bajos y con escaso prestigio social, lo que dificulta, obviamente, el proceso de integración. Así sucedió con los sucesivos movimientos migratorios en la Europa de la posguerra. Este "handicap" inicial se paliaba con el tiempo, no sólo por el esfuerzo del recién llegado, sino por diversos factores sociales. La centralidad de una cultura del trabajo que ofrecía, incluso para los estratos más bajos, un sentido de realización social, mecanismos de identidad e inclusión social con partidos (los sindicatos, la clase) y una autosuficiencia económica personal. La acción del Estado de bienestar y el largo período de expansión económica sostenida, que facilitaron la integración mediante la movilidad social ascendente y el desarrollo de tendencias inclusivas. Muchas veces, los puestos más bajos dejados libres por unos inmigrantes eran sustituidos por la siguiente remesa de recién llegados. En Alemania, los españoles sustituyeron a los italianos y, con el tiempo, fueron sustituidos por los turcos. La integración se basaba en el trabajo productivo y formal, poco cualificado, y en las condiciones más duras, pero con contrato en su inmensa mayoría.

Hoy, se dan diferencias muy notables que operan como obstáculos para la integración de los inmigrantes. En primer lugar, las tendencias a la segmentación del mercado de trabajo, alentadas tanto por los cambios tecnológicos, las nuevas formas organizativas

y la globalización (Castells, 1997) como por la política económica neo-liberal, hegemónica desde la década de los ochenta. A un lado, las ocupaciones formales "con todas las de la ley" que dan seguridad, reconocimiento y facilitan la integración social. En el otro, el paro y la economía sumergida, por definición "ilegal". En medio, las variadas formas de eventualidad y precarización. La conjunción entre integración social basada en el trabajo formal y segmentación del mercado de trabajo configura dos terrenos: los de "dentro" y los de "fuera", con diversas situaciones intermedias. Se habla de "dualización", "polarización", "desestructuración"... con la constatación común de una creciente desigualdad. Tenemos así planteado un problema básico: la sociedad que estamos construyendo integra mal a una parte importante de sus propios miembros nacionales (y los *constituye* como pobres y precarios, habitantes de los límites).

Paralelamente, la cultura del trabajo ha perdido parte de su funcionalidad social. No hace falta compartir los análisis de Rifkin, Gorz, Beck u otros sobre el fin del trabajo o sus radicales transformaciones para constatar que determinados trabajos, relaciones y prácticas laborales difícilmente pueden ofrecer una realización social o constituir una identidad apreciada y reconocida. Igualmente, junto a la creciente fragmentación de los grupos de trabajadores y los cambios en la relación capital/trabajo, los sindicatos pierden parte de su papel integrador, unificador. Añadir, también que el simple trabajo no garantiza —como lo hacía generalmente en el pasado— la suficiencia económica, como demuestra el fenómeno de la "nueva pobreza. Señalar, por último, que la movilidad social ascendente es mucho más selectiva que en el pasado, incluso en períodos de expansión económica: no se da en todos los grupos sociales; no depende ya del simple trabajo, sino de la cualificación, conocimiento y capacidad de "autoprogramación" del trabajador. Según Castells, las divisiones fundamentales del mercado de trabajo se establecen entre trabajadores "autoprogramables" y "genéricos". Éstos que no aportan sino su capacidad bruta de trabajo son reemplazables y eventualmente "desechables", bien sea por recesión o porque su "valor como trabajadores/consumidores se ha agotado y de cuya importancia como personas se prescinde" (Castells, 1998, p. 380). El inmigrante extracomunitario representa el paradigma del trabajador "genérico" que, además, no tiene la cobertura de seguridad y cohesión que proporciona la ciudadanía.

En este contexto social, la inserción laboral de los inmigrantes se realiza de acuerdo con un doble criterio. En primer lugar, el principio de preferencia nacional, "primero los de casa", que adopta diversas expresiones. La preferencia nacional se normaliza⁴, se proclama en los discursos públicos sobre la extranjería, en la "opinión publicada", y forma parte del "sentido común" que informa y modula las prácticas sociolaborales. La preferencia nacional se argumenta de muchas formas. La prioridad de los trabajadores españoles se expresa no sólo como mayor derecho del nacional (en caso de competencia), sino argumentando que están más preparados o que son más eficaces, lo que muchas veces no responde a la realidad⁵.

La inserción laboral de los inmigrantes se orienta, en segundo lugar, a cubrir los sectores y/o "nichos" laborales que, por sus condiciones de trabajo, remuneración y percepción social, no son atractivos para los trabajadores y trabajadoras españoles que, en general, cuentan con mayores recursos (apoyo familiar, redes de relaciones y prestaciones sociales), lo que les permite mayor libertad de elección. En contra del tópico neoliberal, el Estado de bienestar ha aumentado la libertad de elección de mucha gente, dándole mayor capacidad de maniobra frente a la lógica del mercado. La coexistencia de paro y de demanda insatisfecha de mano de obra, en sectores determinados, es una de las razones que ha hecho cambiar la política comunitaria desde unos planteamientos de "inmigración cero" a otros de inmigración controlada⁶. Nos hacen falta personas inmigrantes para el servicio doméstico y el cuidado de

⁴El cupo se fija atendiendo a la situación nacional de empleo (art. 39, LO 8/2000); igualmente, de acuerdo con el número de parados autóctonos, puede denegarse la concesión inicial del permiso de trabajo (art. 38.1, LO 8/2000).

⁵Éste es el discurso de una parte de los agricultores de la moderna agricultura mediterránea, como ha mostrado el estudio de Martín, Melis y Sanz (2001) para Andalucía, País Valenciano y Catalunya, y los trabajos de Pedreño (2001) para la huerta murciana. En todos los casos se constata que, además del mayor derecho al trabajo del autóctono, la preferencia nacional se defiende por la mayor utilidad de la mano de obra nacional, dada su mayor preparación, y la cultura común. El argumento de la preparación es útil si pensamos en la sencillez de la inmensa mayoría de las tareas del peonaje en las explotaciones agrícolas. El segundo argumento a favor del trabajador nacional alude a que, por lengua, cultura y costumbres, es más fácil "entenderse" con el trabajador autóctono que con el extranjero y, por tanto, el primero sería más funcional. Este discurso no responde a la realidad, pero sirve para legitimar y justificar un tratamiento discriminatorio respecto al trabajador nacional, pagar por debajo del convenio, por ejemplo.

⁶Véase, en ese sentido Comunicación 757 (2000) de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre Política Comunitaria de Integración.

personas dependientes; para las tareas de peonaje agrícola, tanto de la agricultura tradicional renovada como de la agricultura industrial; también, como peones en la construcción o la hostelería. Son sectores marcados por salarios reducidos, penosidad física, alta tasa de temporalidad y movilidad geográfica y con una escasa regulación (lo que tiene importantes consecuencias en el caso de las personas inmigrantes, dado su carácter de extranjeras). Orientamos a las trabajadoras y trabajadores extranjeros hacia esos sectores, tanto con medidas normativas (contingente, limitación del permiso de trabajo inicial a un determinado territorio, sector o actividad) como por el funcionamiento de las relaciones y prácticas sociolaborales.

El conjunto de estas tendencias: segmentación del mercado de trabajo, tendencia a la "dualización" social, extensión del fenómeno de la "nueva pobreza", aumento de dinámicas y prácticas socio-laborales con riesgo de exclusión social... afectan de lleno a los colectivos de inmigrantes, que se insertan como "nuestros" pobres, y constituyen obstáculos específicos a su integración. En muchas comarcas y ciudades, podemos constatar una creciente segmentación étnica sociolaboral que, obviamente, es jerárquica, desigual, funcional para la buena marcha de estos sectores económicos y que, por tanto, tiende a legitimarse.

Esta segmentación étnica y, sobre todo, su cronificación constituyen un obstáculo para un proceso de integración, al menos en cuatro sentidos. En primer lugar, se hace más difícil la mejora y movilidad social ascendente, propia de los hijos e hijas, lo que facilita la consolidación de una estructura social etnificada. En segundo lugar, la identificación entre determinados puestos —poco apetecibles— e inmigrantes no contribuye a generar una imagen positiva de éstos (de sus habilidades, potencialidades, etc.) De acuerdo con los contextos sociales, esta segmentación étnica del mercado de trabajo puede facilitar la segregación socioespacial como en el caso de algunos enclaves de la agricultura intensiva mediterránea. Señalar, por último, que la estratificación étnica constituye una mala base que suele agudizar los problemas y/o conflictos que pueden presentarse en todo proceso de integración.

La consolidación de esta segmentación étnica sociolaboral no sólo depende de las "tendencias objetivas" del proceso productivo, también operan los factores institucionales (políticas sociales, normativa de extranjería, trato administrativo) y socioculturales.

Como hemos comentado, la normativa de extranjería orienta a los inmigrantes a los "nichos" y ocupaciones no cubiertas por los nacionales. Cuanto más rígida e impositiva sea dicha orientación, más se consolida la segmentación étnica. Cuanto más limitaciones tenga un permiso de trabajo, mayores serán las dificultades para encontrar una adecuada inserción laboral. Los inmigrantes recién llegados se insertan laboralmente en la agricultura, el servicio doméstico y la construcción. Con el tiempo, se observa una evolución de estos sectores a otros, como industria, servicios más cualificados, transporte (Izquierdo, 2002). En muchos casos, el cambio no supone mayores ingresos, pero sí representa una mayor seguridad, al ser más sencillo hacerse con un contrato de trabajo que permita mantener la vigencia del permiso. Parece, por tanto, que cuanto menos se dificulte este proceso —con unos permisos de trabajo sin restricciones— será más positivo para un proceso de inserción laboral. Otro factor institucional son las políticas sociales. Esta frontera de la segmentación étnica del mercado opera en un marco social en el que han aumentado las tendencias de exclusión y están más débiles los mecanismos correctores inclusivos (consecuencia del recorte relativo de la acción social del Estado). Una buena muestra es la escasa importancia dedicada a las acciones de integración, que deberían, al menos, tratar de paliar los efectos sociales perversos de la segmentación étnico-laboral.

Junto a estos factores más generales (mercado de trabajo, políticas públicas y actitudes y visiones sociales), la inserción laboral de los inmigrantes se ve conformada por los contextos locales y sus relaciones y redes. El grado y las consecuencias sociales de la segmentación étnica del trabajo tenderán a ser más graves en comarcas o provincias con un único sector productivo; por el contrario, territorios con una diversidad de sectores productivos permiten diferentes estrategias de inserción laboral⁷. Otro factor que influye es el modelo de inserción residencial vigente en la zona. Una situación de segregación residencial agudiza las consecuencias de la segmentación étnico-laboral y hace más difícil superar-

⁷Un ejemplo nos lo puede dar la comparación entre la inserción en el Poniente almeriense y en las comarcas litorales valencianas de las provincias de Valencia y Castellón que combinan agricultura intensiva, industria manufacturera turismo y servicios. El inmigrante jornalero puede combinar, y de hecho combina, el trabajo agrícola estacional con trabajar como peón en alguna subcontrata o de pinche en temporada estival. Tiene algunos recursos más que el inmigrante que depende, exclusivamente, del ritmo del invernadero, como es el caso de algunas comarcas de Almería.

las. Una situación de convivencia residencial, obviamente, con sectores de trabajadores autóctonos, puede reducir los problemas de la segmentación étnico-laboral y dar mayores posibilidades para su superación (si no en los padres, al menos en los hijos).

Obstáculos normativos: la jerarquía de derechos y el papel del contrato de trabajo

La normativa española sobre extranjería establece, de forma similar a la de otros Estados europeos, una jerarquía de derechos según el estatus político y administrativo de la persona. Se distingue así entre nacionales, inmigrantes residentes e ilegales. Esta jerarquía de derechos implica el establecimiento de dos fronteras. Por arriba, la frontera de la ciudadanía que separa a nacionales y residentes. Por abajo, la frontera de la ilegalidad que construye a los indocumentados como parias sociales.

Centrémonos en la demarcación superior, la frontera de la ciudadanía. La frontera de la ciudadanía tiende a presentarse y legitimarse como algo "natural", cuando es una forma de organización e identidad social ligada al modelo de Estado-nación. A diferencia de lo que sucedió en el origen de los Estados modernos, la ciudadanía, lejos de constituir un factor de inclusión e igualdad, supone hoy "un factor de exclusión y de discriminación" (Ferrajoli, 1999, p. 32). La ciudadanía que se niega a los inmigrantes tiene una doble dimensión que conviene enfatizar (De Lucas, 1998). Por un lado, la ciudadanía como estatus, título que legitima y habilita para el acceso a los derechos en igualdad de condiciones que el resto de nacionales. Por otro, la ciudadanía como participación, como capacidad y legitimidad para ser uno más del grupo de iguales que decide sobre las leyes que afectan a todos. O, al menos, elegir a los gestores públicos y tener una incidencia relativa sobre sus decisiones.

¿Cómo se concreta esta frontera de la ciudadanía? Se dan diferentes lecturas tanto de la evolución de la doctrina constitucional al respecto, como de las directrices europeas. Incluso las lecturas más abiertas e inclusivas de la normativa establecen con claridad la concreción de la frontera⁸. De acuerdo con el artículo 23 CE, el

⁸Según Aja (1998), la interpretación del Tribunal Constitucional ha experimentado una evolución importante, de la "clasificación tripartita inicial se ha pasado a sostener que (los inmigrantes) son titulares de todos los derechos constitucionales, salvo el art. 23 CE" (Aja

inmigrante, aunque sea residente permanente, carece del derecho de sufragio activo y pasivo y del derecho a acceder a funciones y cargos públicos. Veamos su implicación.

El acceso vetado a la función pública es bastante más que una discriminación simbólica. Tienen importantes consecuencias ya que las diversas Administraciones públicas han constituido una fuente importante de puestos de trabajo (que, además, tienen el atractivo de la seguridad que confiere su carácter funcional). Esta exclusión, que no rige para los extranjeros comunitarios, que sí pueden presentarse a oposiciones, se puede modular en la actualidad o en un futuro de acuerdo con las necesidades. Así, el artículo 10.2 de la LO 8/2000 establece que los extranjeros residentes podrán acceder como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas que, como sabe cualquiera que conoce la Administración, se centra en personal de oficios (peones, basureros, jardineros). Igualmente, ante la falta de atractivo de la oferta de plazas de soldado profesional, el Gobierno remitió al Congreso el pasado marzo un proyecto de ley que permite contratar a inmigrantes como clase de tropa, pero sólo a aquellos que tienen "especiales y tradicionales vínculos históricos, culturales y lingüísticos con España", y por un máximo de tres años. Una decisión que muestra la evolución, social y simbólica, de la milicia desde la tradicional concepción de "los ciudadanos en armas" al moderno Ejército profesional que, simplemente por pudor, no llamamos mercenario.

Vemos cómo los derechos políticos constituyen el núcleo duro de la frontera de la ciudadanía, y existe un amplísimo consenso que legitima esta frontera para la integración. Apuntaré en su contra tres razones. La primera razón es pragmática. Si se priva de los derechos políticos a los inmigrantes residentes, sus necesidades, anhelos y propuestas no cuentan en el ámbito institucional, dado que los colectivos de inmigrantes no proporcionan votos. En estas circunstancias, el ejercicio de otros derechos y la negociación de sus condiciones de inserción resultan disminuidos. Una segunda razón es normativa. La negación de los derechos políticos a personas que viven en el país desde hace años, trabajando, formando familias y pagando sus impuestos, contradice los valores básicos

1998, p. 18). Para una lectura más restrictiva y conservadora de esta evolución, véase el apart. 4 "Tratamiento por el Tribunal Constitucional de los derechos fundamentales de los extranjeros" de la Resolución del Defensor del Pueblo con motivo de solicitud de recurso de inconstitucionalidad contra la LO 8/2000.

de la democracia liberal. Mi tercera razón es simbólica. Si se excluye a los inmigrantes residentes del grupo de iguales que, mediante las elecciones establece las normas del "contrato social", construimos a los inmigrantes como ciudadanos de segunda, junto a otros grupos de "incapaces" (menores de edad, enfermos mentales) o de "indeseables" (penados).

Superar esta frontera de la ciudadanía supone desvincular el derecho de voto de las dos dimensiones de la ciudadanía occidental: la nacionalidad, como miembro de la nación, y la ciudadanía estatal, como expresión de una soberanía, la de la comunidad de ciudadanos⁹. El derecho de voto no puede depender de la identidad nacional, es decir, de la consideración propia y aceptada por el resto de que se es miembro de la nación que, de forma real o imaginaria, sustenta dicho Estado. Este principio es más difícil de sostener en Estados plurinacionales, como el Estado español, con diversas identidades nacionales repartidas de forma heterogénea en el territorio. Igualmente, el derecho de voto al inmigrante residente, como justa contrapartida a su esfuerzo de trabajo e inserción durante años, no puede subordinarse a que el Estado lo reconozca como nacional (máxime cuando tenemos la experiencia del carácter bastante restrictivo del acceso a la nacionalidad en algunos países europeos).

Si desanciamos el derecho de voto de sus antiguos vínculos, hay que reanclarlo en otro: la residencia. Por tanto, superar la frontera de la ciudadanía supone vincularla a la residencia durante una serie de años y conceder el derecho de voto a los inmigrantes que dispongan del permiso de residente permanente. Al menos, habría que plantearse el derecho de sufragio en las elecciones locales, como ya existe, desde hace años, en algunos países europeos.

Dentro de la jerarquía de derechos, me referiré ahora al límite inferior: la *frontera de la ilegalidad*. Es decir, la gestión de la bolsa de indocumentados. En general, la actitud de los gestores públicos ante los inmigrantes indocumentados es ambivalente, y oscila entre la inexistencia y la penalización extrema.

⁹ Se ha solido enfatizar las diferencias entre la tradición francesa, que incide en el "plebiscito diario" de la comunidad de ciudadanos, y la tradición alemana, que destaca la nación como comunidad cultural que hunde sus raíces en el pasado, la sangre, la cultura y la lengua. Si pasamos de los tipos-ideales a la conformación histórica de los Estados-nación europeos, vemos que las dos dimensiones, la asociación política de individuos y la comunidad de nacionales, están implicadas de diferentes formas en las distintas naciones europeas. Véase Schnapper (1990) y Álvarez (1993).

La táctica del silencio es ya antigua. El Plan de Integración de 1994 no hacía referencia a los indocumentados. Se actúa como si no existieran; incluso en los últimos años se ha teorizado la táctica de la ignorancia¹⁰. Sin embargo, la normativa no sólo guarda silencio (en los textos dedicados a la integración), sino también penaliza la condición de indocumentados y los construye como parias sociales (LO 8/2000). Éste es el mayor y más negativo efecto de la frontera de la ilegalidad.

En mi opinión, el trato a los indocumentados es el mayor problema de la LO 8/2000, como los acontecimientos de Murcia de enero 2001 y el movimiento de encierros posterior pusieron de manifiesto. La *Ley construye* a los indocumentados como inintegrables. Reduce sus derechos. En la práctica, además, estos derechos están condicionados por el trato que la nueva ley otorga a los indocumentados. ¿Qué derecho *consistente* puede haber cuando se ha convertido en motivo de expulsión la simple estancia irregular o trabajar sin tener permiso? Si, por un lado, la ley 8/2000 hace más penosa e injusta la situación de las personas indocumentadas, por otro dificulta de forma extraordinaria el acceso a la legalidad de la bolsa de indocumentados (al enducerecer la vía que establecía la Ley 4/2000). Por último, la ley sanciona con la expulsión el simple hecho de encontrarse indocumentado. Esta amenaza tiene un doble consecuencia. Hace del indocumentado un inintegrable, ya que merece la expulsión. Supone, en segundo lugar, una situación de grave inestabilidad personal, social y emocional para las personas afectadas y aumenta su vulnerabilidad.

La LO 8/2000 trata al hombre y a la mujer indocumentados como “no personas”. No son sujeto de derechos fundamentales, se les niegan garantías básicas no ya de un Estado democrático y social, sino simplemente liberal; se les aparta —expulsándolos, real y simbólicamente— de la sociedad. Esta situación de parias sociales, sin vías de “normalización” ágiles, consolida una bolsa

¹⁰Es lo que se conoce como “doctrina Mammes”. Ante las críticas de imprevisión al Gobierno central, después de los sucesos de El Ejido, el entonces ministro argumentó que dado “el carácter ilegal” de los inmigrantes de la zona era “como si no existieran para la Administración”. El Defensor del Pueblo ha avalado similar lógica. En su resolución sobre el recurso de inconstitucionalidad de la LO 8/2000, la oficina de Múgica argumentaba que ante la “imposibilidad manifiesta de poder otorgar una regulación jurídica coherente a las situaciones de ilegalidad...” resulta perfectamente explicable la actitud del derecho convencional, operando como si esas situaciones no existieran, y guardando un escrupuloso silencio sobre ellas.

de marginación y exclusión que puede ser muy funcional en determinados sectores productivos, pero es un desastre en términos de convivencia, calidad democrática y cohesión social.

Por otro lado, una ley “disuasoria” como la 8/2000, no evita la inmigración indocumentada sino que la hace más penosa; aumentará el precio y riesgo de la patera. En un marco de control férreo y restrictivo de fronteras, la inmigración indocumentada obedece a una doble necesidad: la suya de trabajar y la nuestra de obtener mano de obra barata. El verdadero efecto “llamada” no lo constituye un exceso de derechos, como argumentaba el PP para legitimar su reforma, sino la atracción de la economía sumergida y el empleo informal.

La exclusión de los indocumentados plantea dos grandes problemas. Uno, la injusticia y sufrimiento humano de esos hombres y mujeres. Dos, que dicha situación, repercute negativamente sobre la situación de todos los inmigrantes. El “mal trato” a los indocumentados “desestabiliza” la situación incluso de los regulares ya que, por sus empleos precarios, la renovación del permiso no siempre es sencilla. Los hace más vulnerables a aceptar condiciones peores de trabajo para conseguir el ansiado contrato. Por otro lado, para legitimar la exclusión de los indocumentados se les suele criminalizar (empezando por su denominación, *ilegales*). La criminalización del indocumentado proyecta connotaciones negativas, *ilegales*, sobre todo el colectivo.

La frontera del trabajo formal. Otro obstáculo que genera nuestra normativa para un proceso de integración es la identificación entre residencia legal y contrato formal de trabajo y las consecuencias que se derivan de esta identificación. El permiso se asocia a la realización de un trabajo formal, con contrato y cotización a la Seguridad Social. En buena medida, esta identificación es la plasmación normativa de la concepción que se tiene de la buena inmigración que radica, como hemos visto, en su inserción laboral. En este sentido, la ley actual no hace sino mantener la concepción proclamada ya en el Plan de Integración de 1994: “La estabilidad en la ocupación representa un requisito imprescindible no ya para la integración, sino para la mera estancia”.

La exigencia de contrato tiene, como Jano, dos caras. Una inclusiva y otra excluyente. El contrato constituye tanto una prueba de la contribución económica que se realiza, como un elemento

básico de integración. Supone el acceso a la red de protección de la Seguridad social y anexas, facilita la realización del trabajo en similares condiciones a los compañeros autóctonos y dificulta la explotación. La exigencia del contrato también excluye. Excluye a quien no pueda disponer de un contrato aunque realice una actividad económica; en ese caso, no podrá legalizar su situación en nuestro país o puede perder su condición legal si no consigue renovar su permiso.

La identificación normativa entre contrato y legalidad en un contexto de "dualización" del mercado de trabajo y la posición que ocupan en él los inmigrantes, produce el resultado perverso de generar indocumentados. Una paradoja que expresa la relación contradictoria entre la inserción sociolaboral de los inmigrantes y las exigencias de la normativa. Sus requerimientos son divergentes. Por un lado, los orientamos a sectores poco regularizados, de economía informal y sumergida... donde no suelen abundar los contratos (ni para autóctonos ni para inmigrantes). Por otro, les exigimos un contrato de trabajo como requisito de legalidad. Un ejemplo paradigmático lo constituye el servicio doméstico, como analiza Mestre (1999) y Mestre y Casal en este volumen. La normativa que lo regula como relación laboral especial, el Real Decreto 1424/1985, permite que el contrato pueda ser escrito u oral y que la mayor parte de las condiciones laborales se dejen al acuerdo entre las partes, en aras de la flexibilidad de las necesidades familiares, el ámbito privado que constituye el "hogar" y la consideración del trabajo doméstico como "no trabajo". En servicio doméstico, el empleador no tiene obligación legal, ni costumbre, de contratar por escrito. Sin embargo, de acuerdo con la normativa de extranjería, la inmigrante necesita el contrato formal para legalizar su situación. Dada la situación de desigualdad en la relación entre empleador o empleadora y empleada, muchas veces no hay contrato o el precio de éste es muy alto (se declara el mínimo de horas y las extras van gratis).

La identificación normativa entre contrato y legalidad presenta no pocos problemas en nuestro contexto actual. Dificulta mantenerse en la legalidad o acceder a ella desde una situación de indocumentado. Genera inestabilidad e inseguridad respecto al futuro más inmediato. Garantizar una oferta de trabajo o la prórroga del trabajo actual es vital para la renovación del permiso, lo que genera la "obsesión documental". En estas circunstancias, coaccionado

por el ansiado contrato, el inmigrante se encuentra más indefenso ante situaciones de abuso y explotación. El obstáculo de la exigencia del contrato formal se diluye con la residencia permanente que exime del permiso de trabajo. A los cinco años de acreditar trabajo, contribución a la Seguridad Social y permisos renovados, se considera que ya se ha probado —de forma fehaciente— que se es un buen trabajador. Otro problema que presenta la identificación entre contrato de trabajo y permiso es la reducción de la valoración del grado de inserción laboral y social del inmigrante al contrato formal. No se trata de infravalorar la importancia de disponer de un contrato, particularmente en el caso de los inmigrantes. Se trata de no hacer del contrato la condición *sine qua non* para el carácter legal del inmigrante, la única prueba de autosuficiencia económica y arraigo social.

¿Son posibles otras fórmulas? Cabría potenciar, por supuesto, que el trabajador o trabajadora inmigrante disponga de contrato, pero establecer otras "pruebas" de arraigo social y autosuficiencia económica que permitan acceder a un permiso o renovarlo (padrón, escolarización de menores cuando los hubiera, acreditación de vivienda, informes de servicios sociales...). Se trata, en mi opinión, de avanzar en desvincular legalidad y contrato de trabajo. La legalidad y su renovación deben establecerse en función de la residencia y del cumplimiento de las leyes y normas. No puede depender de una única forma de inserción laboral que respondía a la inmigración en Europa de los años sesenta, pero no a la inserción real de los inmigrantes hoy. Dicho de otra forma, la normativa debe adecuarse, o como mínimo no entrar en abierta contradicción, con la realidad de la sociedad "dual" y la particular inserción de las personas inmigrantes en ella.

La diferencia cultural como problema

En el último período, han aumentado las opiniones que abordan la inmigración como un problema cultural, y el multiculturalismo como una inconveniente y perversa forma de gestión de ese pluralismo que aportan los inmigrantes. Ambos temas van de la mano, son desarrollados por los mismos autores y como, veríamos, las preocupaciones y concepciones que sustentan ambas opiniones son similares. Por otro lado, en el contexto posterior al 11-S estas ideas han ampliado su influencia. Lo árabe, por extensión, lo

musulmán, está bajo sospecha. Esta "sospecha" tiene una doble proyección: externa e interna. Su proyección externa es la revitalización de las tesis que, como Huntington, ven en el "choque de civilizaciones" una fuente fundamental de los conflictos futuros (el más destacado el que opone la cultura occidental e islamismo). La mirada, las actitudes y las prácticas legitimadas hacia los países musulmanes están fuertemente condicionadas por estas concepciones¹¹. Pero también se da una proyección interna de esta "sospecha": hacia las minorías musulmanas europeas, con puestas, en su inmensa mayoría, por personas inmigrantes. Las dos "sospechas" se refuerzan mutuamente.

Cada vez más, la atención sobre la cultura musulmana en la inmigración presenta tres notas características. Cuando se habla de problemas, se refiere siempre a la cultura del inmigrante; parece que en la cultura de la sociedad receptora no haya nada problemático o que repensar ante los nuevos retos. Sin embargo, que una distancia cultural, definida en términos lingüísticos, de costumbres o religión, sea considerada peligrosa o poco relevante para la integración y la cohesión social, depende también del grado de apertura o cierre del código identitario de la sociedad receptora; de su etnocentrismo; de las tradiciones políticas y culturales de tratamiento de la diversidad; del grado de tensión con que se vivan las diferencias internas y de cómo se considera que los recién llegados puedan afectar. Algo que unifica las propuestas, diversas, de Herrero de Miñón, Sartori y Azurmendi es la presunción de que los problemas sólo proceden, básicamente, de la cultura del inmigrante. Tal posición nos muestra la autosatisfacción por nuestro orden político, social y simbólico. La unilateralidad es patente, pero tiene una ventaja: descarta nuestra responsabilidad y la descarga en el "otro".

En segundo lugar, los problemas son más importantes e inevitables cuando mayor sean las diferencias culturales con nosotros. Es la regla de "la distancia cultural" popularizada por Sartori, para el que la cultura y religión islámica configuran tal diferencia que impiden a los inmigrantes asimilar nuestras normas de convivencia y los hace inintegrables. Dado el carácter teocrático del islam, su fundamentalismo, su falta de respeto por los derechos humanos

¹¹En febrero de 2002 se realizó en Estambul una reunión de los ministros de Exteriores de la UE, de países candidatos y de la Organización de la Conferencia Islámica con el objetivo explícito de abrir un proceso de acercamiento entre Europa y el islam y "neutralizar la amenaza del choque de culturas" (*El País*, 13-II-2002).

y la posición subordinada de la mujer, las personas de tradición islámica serán incapaces de adaptar y hacer compatible su vida con la religiosa comunitaria y la integración en sociedades democráticas liberales como las nuestras. Se convierten en "abiertos y agresivos enemigos culturales" (Sartori, 2000, p. 54). Para una crítica a estas posiciones, véase el capítulo de Alvarez en este volumen. Sin el extremismo de la posición de Sartori, se extiende la idea que el mantenimiento de la cultura y fe islámicas por parte de los inmigrantes procedentes de países musulmanes constituye un obstáculo a su integración. Se observa con preocupación las demandas de los colectivos musulmanes en reconocimiento de prácticas, espacios y ritos propiamente musulmanes (apertura de mezquitas, espacio para cementerios islámicos, peticiones de alimentos halal en espacios públicos o ajuste de la jornada laboral en el Ramadán cuando el número de inmigrantes musulmanes es notable...). Más todavía: se considera que todas estas demandas revelan escasa voluntad de integrarse¹². En otros casos, las diferencias culturales problemáticas no se enuncian en términos de religión sino de lengua, costumbres y "afinidad cultural".

Y, tercera nota, la dimensión cultural se afirma como un criterio básico para la gestión de la inmigración deseada. La diferencia cultural ha pasado a ser un criterio legítimo de selección y fomento de una inmigración u otra, presente en los discursos¹³ y en las prácticas sociales. Recientemente, el presidente de la patronal fresera onubense justificaba la negativa a contratar marroquíes y su sustitución por europeos del Este y latinoamericanos, en el carácter "más polémico" del trabajador marroquí, «porque tiene otras costumbres, otra cultura, diferente a la nuestra»¹⁴.

Esta "culturalización" de los problemas supone ignorar la complejidad de un proceso de integración. Su éxito se enfrenta a otros

¹²Si la visibilidad es sospechosa, también lo puede ser la invisibilidad, como prueba el recelo respecto a los inmigrantes chinos, precisamente por ser una comunidad discreta y con una proyección pública muy limitada. Igualmente, el perfil muy bajo y reservado de las comunidades judías en nuestro país, avalado por buenas razones, suele suscitar interrogantes vinculados a los fobotipos sobre ellos. Por tanto, la clave no radica en la visibilidad mayor o menor, normalmente vinculada a mayor o menor presencia pública, sino en la lectura que nosotros hacemos de ello.

¹³Para Sartori, la diferencia cultural es un «elemento fundamental para calibrar la inmigración» (*El País* 6-04-2001). De forma más autocontentida, Herrero de Miñón apunta las diferencias lingüísticas y culturales y aboga por no fomentar la "difícilmente integrable inmigración magrebi". Igualmente, el Defensor del Pueblo propuso —aduciendo "razones de afinidad cultural"— favorecer la inmigración latinoamericana (*El País*, 22-XII-2000).

¹⁴*El País*, 8-III-2002.

obstáculos tanto o más decisivos que la distancia cultural o la actitud de quien llega, obstáculos como el estatus jurídico desigual, una inserción laboral subordinada, inestable y "de segunda", formas diversas de segregación socioespacial o de convivencia degradada, y la existencia y extensión de prejuicios y fobotipos respecto de la inmigración. Se considera, no sin razones, que la afinidad lingüística y cultural facilita la integración. Sin embargo, no se puede correlacionar misma lengua o similitudes culturales con un buen proceso de integración. Para los hijos e hijas de inmigrantes turcos nacidos en Alemania, socializados en alemán, el obstáculo no era lingüístico sino la vinculación de la ciudadanía al *Völkler*. En Francia, no es el desconocimiento del idioma o de la cultura francesa el obstáculo de la integración de los inmigrantes marroquíes y subsaharianos francófonos. En España, puede padecer un mayor rechazo un inmigrante sudamericano negro que un eslavo (a pesar de los mayores elementos culturales comunes con el primero: lengua, religión, un pasado de mayor vinculación).

Una muestra de las consecuencias de esta visión sobre la cultura musulmana y la "culturalización" de los problemas de proceso de inserción de los inmigrantes, la constituye las opiniones de Azurmendi, presidente del Foro de la Inmigración, sobre El Ejido. De acuerdo con su análisis, los inmigrantes marroquíes tienen dos *handicaps* culturales: no vienen de una cultura del trabajo y carecen de dignidad, sometidos como están a su comunidad, clan familiar y normas culturales. Son estas diferencias culturales las que en última instancia se presentan como las dificultades centrales de su adecuada inserción. La explotación, la precariedad extrema, la segregación residencial, la tensa xenofobia ambiental, pasan a un segundo plano, se diluyen. Dada su cultura, su obsesión por enviar el dinero a su país, preso de sus fidelidades de clan, su falta de dignidad que le hace descuidar su aseo y condiciones de vida, los inmigrantes marroquíes se hacían en infraviviendas. La conclusión: los inmigrantes son los principales responsables de sus propios problemas.

* * *

De la concepción de integración defendida en estas notas, de su carácter multidimensional y de las fronteras y obstáculos comentados, se derivan tres constataciones que resaltaré para terminar.

Una primera. La integración si se quiere que sea una realidad, y tenga unos mínimos de calidad democrática, afecta a muchas de

las bases del actual "contrato social", entre otras a las tendencias socioeconómicas, los criterios de ciudadanía y de funcionamiento del "hogar público", los factores de cohesión e identidad social común, así como la gestión de una diferencia creciente.

A menudo se habla de los problemas que nos plantea la inmigración. La necesidad de reescribir el "contrato social" a la que aludo no nos viene impuesta por la presencia de los inmigrantes sino por los problemas y limitaciones que manifiesta nuestro funcionamiento social. La precarización socioeconómica de los sectores más débiles y con menores recursos en una sociedad más competitiva, el aumento del riesgo de exclusión para estos mismos sectores, los diversos síntomas de malestar respecto a la identidad y el sentido, la necesidad de readecuar el Estado-nación y la vieja ciudadanía a los nuevos tiempos..., estos problemas no los han generado los inmigrantes. Son nuestros problemas. Simplemente, la presencia de los inmigrantes los hace más visibles al colorearlos étnicamente y hacer más patentes sus consecuencias.

En tercer lugar, como se ha reiterado, cabe concebir un proceso de integración como cosa de dos partes que no son, por cierto, ni homogéneas ni compactas. Hay un esfuerzo, un cumplimiento de derechos y obligaciones por parte de los inmigrantes. Usualmente tiende a resaltar ese aspecto. Por mi parte, me gustaría subrayar nuestra responsabilidad: transformarnos de sociedad receptora en sociedad de acogida. Es decir, que una mayoría social acepta e incorpora los cambios normativos, de orientación y funcionamiento económico, institucionales y de código identitario común que hagan posible un proceso de integración.

Bibliografía citada

- Aja, Eliseo (1998), "Derechos y deberes fundamentales de los inmigrantes", *Jornadas sobre políticas de inmigración y políticas de integración*, Barcelona.
- Álvarez Dorronsoro, Ignasi (1993), *Diversidad cultural y conflicto nacional*, Madrid, Ed. Talasa.
- Azurmendi, Mikel (2001), *Estampas de El Ejido*, Madrid, Taurus.
- (2001), "Qué fue hacer Estampas en El Ejido", en Pimentel Siles, M. (coord.), *Procesos migratorios, economía y personas*, Instituto CajalMar, Almería.

Castells, Manuel (1997), *La sociedad red*, Madrid, Alianza Editorial.

—(1998), *Fin de milenio*, Madrid, Alianza Editorial. Comisión de las Comunidades Europeas (2000), Comunicación 757 sobre una Política Comunitaria de Inmigración, Bruselas.

Dassetto, F. (1990), "Pour une théorie des cycles migratoires" en Bastenier, A y Dassetto, F., *Immigrations et nouveaux pluralismes. Une confrontation de sociétés*, Bruselas, De Boeck-Wesmael.

De Lucas, Javier (1998.a), "Poden els drets humans tornar a ser un ideal d'emancipació?", *Veus Alternatives*, 11.

—(1998.b) "La sociedad multicultural. Problemas jurídicos y políticos", en Añón, Bergalli, Calvo y Casanovas (coords.), *Derecho y sociedad*, Valencia, Tirant lo Blanch.

—(2001.a), "Sobre las condiciones de la ciudadanía inclusiva (el test del contrato de extranjería)", *Hermes*, 1/2001.

—(2001.b), "Ciudadanía y Unión Europea intercultural", *Anthropos*, 191/2001.

Delgado, M. (1998), "Diversitat cultural i integració social", *Diversitat i integració. Lògica i dinàmica de les identitats a Catalunya*, Barcelona, Empúries.

Ferrajoli, Luigi (1999), *Derechos y garantías. La ley del más débil*, Madrid, Editorial Trotta.

Giménez, C. (1996), "La integración de los inmigrantes y la interculturalidad", *Arbor*, 607.

Izquierdo Escribano, A. (2002), "Panorama de la inmigración en España al alba del siglo XXI", en Pimentel Siles, M. (coord.), *Procesos migratorios, economía y personas*, Instituto CajaMar, Almería.

Izquierdo Escribano, A. y Noya, J. (1999), "Lugares migratorios. Una propuesta teórica y metodológica para el análisis de la integración social de los inmigrantes", *Migraciones*, 6/1999.

Martín Díaz, E. (dir.), Castaño Madoñal, A. y Rodríguez García, M. (1999) *Procesos migratorios y relaciones interétnicas en Andalucía: una reflexión sobre el caso del Pontiente almeriense desde la antropología social*, OPI. MTAS, Madrid.

Martín Díaz, E., Melis Maynar, A. y Sanz Casas, G. (2000), *Mercados de trabajo e inmigración extracomunitaria en la Agricultura Mediterránea*, Junta de Andalucía, Generalitat Valenciana y Diputació de Barcelona.

Mestre i Mestre, Ruth (1999), "¿Por qué las inmigrantes no trabajan? Breve crítica feminista al derecho de extranjería", *Jueces para la Democracia*, 36.

Pedreño Canovas, Andrés (2001), "Inserción laboral de los inmigrantes: modalidades y consecuencias. Referencias al caso de la agricultura industrial murciana", *IX Jornadas "Inmigración, diversidad y democracia"*, Mesa d'Entitats-Patronat Sud Nord, Universitat de Valencia.

Pedreño Canovas, Andrés y Castellanos Ortega, M^a Luz (2001), "Desde El Ejido al accidente de Lorca. Las amargas cosechas de los trabajadores inmigrantes en los milagrosos vergeles de la agricultura mediterránea", *Sociología del Trabajo*, 42.

Sartori, Giovanni (2000), *La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*, Madrid, Taurus.

Schnapper, D. (1991), "La France de l'intégration", París, Editions Gallimard.

Wieviorka, Michel (1994), "La gran mutación: precondiciones del auge racista en Francia", en Contreras, Jesús (compilador), *Los retos de la inmigración. Racismo y pluriculturalidad*, Madrid, Ed. Talasa.